

JUNIO

REVISIÓN DEL AÑO



HUNGRÍA: Se produjo un nuevo ataque contra las libertades, bajo la forma de una ley que limita el financiamiento internacional para la sociedad civil.

JUNIO REVISIÓN DEL AÑO

En un avance para la libertad de expresión, Dinamarca abolió en junio su **ley sobre blasfemia**. Otro hecho positivo fue que seis personas que habían sido acusadas de privación ilegítima de la libertad fueron declaradas **inocentes** en un juicio en Irlanda. Los acusados habían rodeado el automóvil del viceprimer ministro, manteniendo al funcionario atrapado, durante una protesta de 2014 motivada por un nuevo impuesto sobre el agua. Muchos consideraron que los cargos habían sido excesivos y políticamente motivados, y señalaron el peligro de que el discurso de la seguridad del Estado inhibiera la desobediencia civil.

Mientras la sociedad civil acogía con satisfacción el cambio legal en Dinamarca, en Japón una nueva ley suscitaba gran preocupación, tanto en la sociedad civil japonesa como entre expertos en derechos humanos de la ONU, en relación con el derecho a la privacidad. La **Ley Anti-Conspiración** amplió enormemente los poderes de vigilancia del Estado para abarcar la investigación de 277 tipos de posibles delitos, lo cual supone un enorme potencial para el abuso. Miles de personas protestaron en Tokio, la capital, tras la aprobación de la ley. El mes anterior se habían organizado manifestaciones aún más numerosas, estimadas en 55.000 personas, contra medidas dirigidas a cambiar la constitución del país, declaradamente pacifista, mientras que en el mes de agosto se produjeron **protestas** contra la reubicación de una base militar de los Estados Unidos.

En Palestina, una nueva **Ley de Delitos Informáticos** contiene disposiciones preocupantes sobre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. La ley impone duros castigos para delitos vagamente definidos, ordena a las compañías de internet que compartan datos con el Estado y facilita el bloqueo de sitios web. Las autoridades se apresuraron a ejercer sus nuevos poderes: se estima que hacia julio habían sido bloqueados unos 30 sitios web, en tanto que **cinco periodistas** fueron arrestados y acusados bajo la nueva ley en agosto.

Otros cambios legales preocupantes que afectaron a la sociedad civil se produjeron en Tayikistán, donde la enmendada **ley sobre corrupción** obligó a las OSC, así como a los partidos políticos y organizaciones internacionales que trabajan en el país, a proporcionar a las autoridades gubernamentales anticorrupción detalladas evaluaciones del riesgo de corrupción. En las condiciones de un espacio cívico represivo en el cual las OSC son sometidas regularmente a inspecciones intrusivas, la sociedad civil temió que las nuevas medidas dieran lugar a una aún mayor interferencia gubernamental. En Hungría, por su parte, se aprobó una ley que exige a las OSC que reciben fondos internacionales declararse como extranjeras y publicar los nombres de sus donantes, una medida que permitirá al Estado vilipendiar a las OSC.

El balance de junio fue mixto en materia de derechos LGBTI. La Marcha del Orgullo de Manila, en las Filipinas, reunió en una **celebración pacífica** a más de 7.700 personas, una cifra muy superior a la de 2016. Miles de personas también marcharon en un **desfile del orgullo** LGBTI en Sofía, Bulgaria. La marcha fue pacífica y, tras recibir amenazas de la extrema derecha, recibió la protección de la policía. En Tanzania, en cambio, las personas LGBTI siguieron recibiendo **amenazas** desde las más altas esferas: el presidente Magufuli acusó a las OSC que trabajan por los derechos LGBTI de importar malas prácticas al país. Unos días más tarde, el ministro de Asuntos Internos, Mgiwgulu Nchemba, amenazó con dar de baja a las OSC de promoción de los derechos LGBTI y encarcelar a sus activistas.

La sociedad civil camboyana llamó la atención sobre **múltiples irregularidades** en las elecciones locales de junio, tales como presiones sobre los observadores electorales que los obligaron a abandonar sus puestos y la presencia en los centros de votación de un gran número de personas no autorizadas. En el mismo mes, el gobierno anunció su intención de investigar la “neutralidad” de una serie de OSC. En Serbia, la **toma de posesión** del nuevo presidente y ex primer ministro, Aleksander Vučić, estuvo marcada por una serie de ataques físicos y amenazas contra periodistas, a lo que se

sumó el hecho de que la policía se negó a intervenir cuando se denunciaron los incidentes. Al mes siguiente entraron desconocidos en el apartamento de la periodista Dragana Peco, que estaba investigando los ataques, pero no robaron ningún artículo de valor. Los ataques fueron consistentes con el estrechamiento de la libertad de expresión que acompañó a las elecciones de abril, particularmente para las **periodistas mujeres**. También hubo protestas ciudadanas contra la toma de posesión.

En el Líbano, las **protestas** que se desarrollaron frente al parlamento mientras éste votaba por extender por tercera vez su mandato, fueron respondidas con violencia. El gobierno del Líbano, dividido y disfuncional, ha permanecido en punto muerto por años, durante los cuales las elecciones fueron repetidamente postergadas. Si bien la nueva ley electoral, finalmente aprobada en junio, allanó el camino hacia unas elecciones que posiblemente se celebrarán en mayo de 2018, la lentitud del cambio indignó a la ciudadanía. La fuerza excesiva utilizada para sofocar la protesta, que incluyó el uso de porras, dejó al menos siete personas heridas.

Panamá fue testigo de varias **protestas**, entre ellas una manifestación fuera de la residencia del presidente contra un proyecto de ley que podría aumentar el impuesto inmobiliario y una protesta de los estudiantes. En ambos casos hubo enfrentamientos violentos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos contra la protesta estudiantil. Nueve agentes de policía sufrieron heridas leves y cuatro estudiantes fueron arrestados. En los meses siguientes fueron reprimidas otras manifestaciones, incluida una **protesta de maestros** que fue reprimida con arrestos y gases lacrimógenos. Costa Rica, por su parte, presenció en junio y julio una serie de **huelgas**, entre otros de maestros y **trabajadores judiciales**, así como una huelga general de un día que fue acompañada de marchas masivas en varias ciudades.

El gobierno de Gabón **suspendió** durante dos meses la publicación de un periódico por considerar que había insultado públicamente al presidente.

También arrestó y detuvo al dirigente sindical Marcel Libama y al periodista que lo entrevistó, Jules Bivinga. Ambos fueron acusados de difamación tras la publicación de una entrevista en torno de los cargos presentados contra otro sindicalista por llevar a cabo una asamblea no autorizada. Su sindicato, Conyased, había sido suspendido en marzo después de una huelga de larga duración, y en mayo fue dispersada una reunión sindical fue dispersada por las fuerzas de seguridad. En otro incidente en Gabón, un grupo de personas armadas asaltó las instalaciones de cuatro medios de comunicación en Libreville, la capital, insistiendo en que transmitieran mensajes en apoyo de un candidato político de la oposición.

La Autoridad de Medios de Sudán del Sur **prohibió** la entrada a o la actividad en el país a 20 periodistas extranjeros, alegando que sus noticias carecían de fundamento y podían provocar violencia. La prohibición fue levantada más tarde ese mismo mes a causa de la presión del Comité Directivo del Diálogo Nacional. Sin embargo, el Estado siguió siendo el principal instigador de violencia en Sudán del Sur, mediante una campaña sostenida y brutal contra la sociedad civil y la libertad de los medios de comunicación. El mes siguiente, el Estado **bloqueó el acceso** a diversos sitios de noticias y blogs.

Como parte de una crisis diplomática entre los gobiernos de Qatar y Arabia Saudita y sus aliados, fue **atacada** la red Al Jazeera. Los gobiernos de Bahréin, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos exigieron que Qatar cerrara Al Jazeera. Posteriormente fueron bloqueados los sitios web de Al Jazeera en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, fue cerrada su oficina en Riad, la capital de Arabia Saudita, y se le retiró su licencia en Jordania y Arabia Saudita. Sus sitios web fueron luego bloqueados mediante un **ataque informático** sostenido. La sociedad civil condenó estos ataques contra la diversidad de los medios y la libertad de expresión.

HUNGRÍA: SOCIEDAD CIVIL ATACADA POR POLÍTICA DE MANO DURA

Ediciones **anteriores** de nuestro Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil monitorearon el rumbo crecientemente nacionalista y socialmente conservador que ha tomado el primer ministro de **Hungría** Viktor Orbán, en el poder desde 2010, colocando a su gobierno en contradicción con sus compromisos de derechos humanos en tanto que miembro de la UE. El primer ministro Orbán ha hablado de convertir a Hungría en un “**estado iliberal**”, citando a China y a Rusia como modelos a seguir, e hizo causa común con el liderazgo ideológicamente afín de Polonia, prometiendo liderar una “**contrarrevolución cultural**” en la UE.

En junio se produjo un nuevo ataque contra las libertades de la sociedad civil, bajo la forma de la aprobación de la Ley de Transparencia de Fondos Extranjeros, una medida **condenada** por el Parlamento Europeo y la sociedad civil internacional. La ley **requiere** que cualquier OSC que reciba fondos de más de 24.000 euros (unos 28.000 dólares) procedentes del exterior se registre como una organización “con respaldo extranjero” y añadida esta inscripción en todas sus comunicaciones, así como que declare todo aportante extranjero que le proporcione más de 1.600 euros anuales (aproximadamente 1.900 dólares). Las sanciones por incumplimiento pueden incluir el congelamiento de los activos de una organización y la finalización forzosa de sus actividades. Pese a que en las últimas etapas del trámite del proyecto de ley se obtuvieron **algunas concesiones** en relación con el anonimato para donaciones menores, fue clara su intención de socavar la credibilidad de muchas OSC mediante su estigmatización como “agentes extranjeros”, siguiendo la línea inaugurada por **Rusia** e **Israel**.

Anita Koncsik, de la **Unión Húngara para las Libertades Civiles (HCLU)**, rechaza el argumento de que la nueva ley es necesaria para mejorar los estándares de rendición de cuentas de las OSC, dados los estrictos requisitos de presentación de informes ya vigentes:

No es necesaria en absoluto. Las OSC están cumpliendo con los requisitos integrales de transparencia ya existentes. La Ley de Libertad Sindical, sobre el Estatus de Entidad sin Fines de Lucro y sobre la Operación y el Apoyo de las Organizaciones Civiles (2011), también conocida como la Ley Civil, ya establece qué informes financieros se deben presentar para cumplir con los estándares de transparencia. La HCLU tiene que hacer cuatro informes anuales, incluido uno centrado en las donaciones. Las OSC que no reciben fondos públicos húngaros deben publicar un informe financiero anual, un informe sobre sus actividades sin fines de lucro y un informe sobre donaciones.

Hungría tiene una sociedad civil vibrante y diversa que incluye a unas **60.000** OSC. Pero es difícil escapar a la sospecha de que el sector de la sociedad civil al que se dirigen los ataques es precisamente el que defiende los valores progresistas, lo cual lo pone en situación de oposición al partido en el poder. Por ejemplo, mientras que el partido gobernante construyó su base de apoyo mediante la adopción de una posición dura hacia migrantes y refugiados, que incluyó la construcción de **nuevas barreras fronterizas** en 2015 y 2017, esos grupos de la sociedad civil se caracterizan por impulsar la posición opuesta, mediante la provisión de atención y apoyo a migrantes y refugiados. Dadas la debilidad del parlamento y las restricciones sobre los medios, a menudo ha sido la sociedad civil la que ha asumido el rol de escrutar las acciones del Estado, por ejemplo mediante la **exposición** de la corrupción estatal. La nueva ley puede ser aprehendida como tan solo una de una **serie de acciones** empleadas para dificultar la expresión y el intercambio de opiniones divergentes de las narrativas oficiales, y que han incluido la concentración de la propiedad de los medios, campañas de odio y uso de la violencia. A modo de ilustración, Anita describe una sostenida campaña de intimidación:

La propaganda del gobierno estableció un vínculo falso entre la defensa de los derechos humanos y el terrorismo, ya que según el relato del gobierno el fenómeno de los refugiados es la raíz del terrorismo. Existe un grupo de prominentes OSC de derechos humanos que dedican atención a los derechos de los refugiados y tratan de ayudarles a pesar de las hostiles circunstancias actuales. Es por eso que esas OSC se enfrentan a acusaciones de apoyo al terrorismo.

Si bien creemos que la rendición de cuentas es importante tanto en el ámbito gubernamental como en el no gubernamental, la nueva regulación claramente sirve a otros intereses. Esa es la razón por la cual fue integrada en la campaña de desprestigio desplegada por el gobierno contra las OSC que se atreven a adoptar una postura crítica contra sus medidas. Se trata de un intento de silenciar o amenazar voces críticas. Viola la libertad de expresión, sirve para estigmatizar a las OSC e infringe la privacidad de los donantes.

Esta propuesta encaja claramente en la hostil campaña anti-OSC iniciada cuatro años atrás, en cuyo marco el primer ministro Orbán denunció a las OSC de derechos humanos como agentes de intereses políticos extranjeros y respaldó la idea del “estado iliberal”. Los ataques retóricos fueron acompañados de una serie de controles administrativos e investigaciones penales. Al final, todas las investigaciones fueron cerradas y ninguna arrojó indicio alguno de delitos o irregularidades. En 2016, después de un proceso legal de dos años y medio, la HCLU sacó a la luz el hecho de que las investigaciones del gobierno habían sido ordenadas por el propio primer ministro, lo cual demuestra la naturaleza puramente política de las auditorías.

Un blanco específico de la nueva ley es George Soros, el financista y filántropo húngaro basado en los Estados Unidos, fundador y patrocinador de la Open Society Foundations, que apoya profusamente a la sociedad civil – incluida la HCLU – en Hungría y en muchos otros países. El presidente Orbán, que se



Ciudadanos protestan contra los planes de cierre de la Universidad Centroeuropa

Crédito: Getty Images

beneficia del estrecho control de los medios públicos, libra una **campaña de difamación** contra Soros, a quien acusa de promover la migración masiva a Hungría y la UE. La campaña ha incluido anuncios en la prensa y en la vía pública, algunos de los cuales han sido “intervenidos” con insultos antisemitas, un **tema implícito** muy presente en la campaña. El portavoz internacional del presidente Orbán, Zoltan Kovacs, **describió** a las organizaciones financiadas por Soros como “agentes extranjeros financiados con dinero extranjero” e indicó que las OSC no deberían desempeñar ningún rol de incidencia con el objeto de influir sobre la toma de decisiones políticas, dejando al descubierto una muy estrecha interpretación de la democracia. Human Rights Watch, una de las organizaciones respaldadas por Soros, recibió ataques verbales, mientras que Amnistía Internacional fue acusada por el gobierno de publicar informes falsos y alentar a los inmigrantes a violar las leyes.

En abril, el gobierno **aprobó rápidamente una ley** destinada a dificultar el funcionamiento de las universidades extranjeras en Hungría. Se trató de un ataque claro y directo contra la **Universidad Centroeuropea** (UCE), financiada por Soros, y por extensión contra las nociones más amplias de pluralismo y libertad de pensamiento. Dada la cercanía de las elecciones programadas para abril de 2018, da la impresión de que la demonización de Soros y el desprestigio de la sociedad civil constituyen piezas claves de la estrategia de reelección del partido gobernante. Anita ofrece más detalles sobre estos ataques:

La propaganda del gobierno comenzó a presentar a las OSC que lo critican como un riesgo para la seguridad nacional. Szilárd Németh, vicepresidente del partido gobernante, Fidesz, y del Comité de Seguridad Nacional del parlamento, anunció en septiembre de 2016 que había solicitado a los servicios de seguridad nacional que inspeccionaran a las organizaciones que “cooperaran con la red Soros”. Afirmó que había identificado a 22 organizaciones de ese tipo y dijo que estas organizaciones violaban abiertamente las leyes húngaras y europeas y participaban ilegalmente en la política con “dinero negro”. En Hungría, los servicios secretos pueden recopilar información sin orden judicial en casos donde hay riesgo para la seguridad nacional.

En diciembre de 2016, el primer ministro Orbán anunció que en 2017 otros estados intentarían “expulsar” de sus países a George Soros y a las organizaciones apoyadas por él. Un mes después, Szilárd Németh dijo: “El imperio Soros sostiene a falsas organizaciones civiles para que el capital global y el mundo de la corrección política puedan imponerse sobre los gobiernos nacionales. Debe obligarse a estas organizaciones a retroceder por todos los medios disponibles, y creo que tienen que ser barridas de aquí”.

ES DIFÍCIL
ESCAPAR A LA
SOSPECHA DE
QUE EL SECTOR
DE LA SOCIEDAD
CIVIL AL QUE
SE DIRIGEN LOS
ATAQUES ES
PRECISAMENTE
EL QUE DEFIENDE
LOS VALORES
PROGRESISTAS,
LO CUAL LO PONE
EN SITUACIÓN DE
OPOSICIÓN AL
PARTIDO EN EL
PODER

Estas declaraciones revelan el verdadero objetivo del iliberal gobierno húngaro: estigmatizar y silenciar a quienes expresan opiniones críticas sobre los asuntos públicos.

Muchos países que han dado un giro hacia políticas más derechistas y menos pluralistas, tales como Bulgaria, Israel, Polonia, Serbia y Eslovaquia, han atacado el apoyo de George Soros a las OSC. El proceso pareció acelerarse tras la victoria electoral del presidente Trump en 2016, puesto que los partidarios de Trump también **atacaron a Soros** y lo acusaron de financiar protestas anti-Trump. En Rumania (*véase febrero*), la televisión estatal **acusó** a Soros de pagar a gente para que participe en grandes protestas contra la corrupción, en un intento de negar la realidad de la ira ciudadana ante el mal gobierno.

En Macedonia, el ex primer ministro Nikola Gruevski, quien debió dimitir en 2016 tras un escándalo de vigilancia en gran escala, hizo un llamamiento a la “**des-sorosización**” de la sociedad civil, afirmando falsamente que más del 90% de las OSC macedonias estaban financiadas ya sea por Soros, ya por gobiernos extranjeros controlados por él. Un grupo vinculado al partido gobernante acusó a destacados activistas de la sociedad civil de estar a sueldo de gobiernos extranjeros; en el período previo a las elecciones de diciembre de 2016, dichos activistas fueron objeto de amenazas y expresiones de odio en las redes sociales. En enero, esa retórica derivó en el lanzamiento de una campaña llamada “**Alto a la Operación Soros**”, que fue acompañada de la acelerada creación de nuevas organizaciones autodenominadas “**ONG patrióticas**”, alineadas con causas nacionalistas asociadas al clivaje étnico de Macedonia (*véase febrero*). En mayo, el gobierno saliente de Macedonia intentó entregar fondos estatales a este grupo de organizaciones nacionalistas, pero su decisión fue revertida por el nuevo gobierno que asumió en junio. En febrero, el gobierno macedonio también **lanz**ó una ola de inspecciones y auditorías de **21 OSC** que antes de las elecciones habían participado en una campaña de educación electoral políticamente neutral, tomando prestada la táctica húngara de inspeccionar y auditar arbitrariamente a las OSC críticas.

En todos los contextos, lo que se busca es fabricar un enemigo que funcione como cortina de humo para atacar derechos y a los grupos que llaman a los poderes políticos y económicos a rendir cuentas. George Soros se ajusta a la imagen del archienemigo que solo puede ser contrarrestado por el poder político centralizado y la política nacionalista.

En el caso de Hungría, sugiere Anita, la intención fue también dividir a la sociedad civil entre un campo obediente, acrítico y financiado por el gobierno, y un campo que puede ser demonizado como antigubernamental y antipatriótico, y al que se le niega la posibilidad de recibir recursos:

*Las OSC reciben diferente trato dependiendo de los recursos financieros a los que tengan acceso y al nivel de crítica hacia el gobierno que se atreven a expresar. Hay organizaciones progubernamentales como el Foro de Cooperación Civil (Civil Összefogás Fórum, CÖF), que organizó “**marchas por la paz**” en apoyo al gobierno y participó muy activamente en la campaña electoral de 2014 del lado de los partidos en el poder. CÖF afirma que financia sus operaciones exclusivamente a través de donaciones privadas. Sin embargo, no está claro en sus informes quiénes son esos donantes, y CÖF tiene una conexión comprobada con una fundación del partido gobernante de la cual ha recibido decenas de millones de florines. Según el gobierno, sin embargo, la transparencia de la organización no constituye un problema.*

No todos los ciudadanos apoyan las medidas del gobierno, y la sociedad civil las está resistiendo. Miles de personas protestaron en Budapest **antes** y **después** de que se aprobara la ley que afectó a la UCE. Anita describe las protestas y la reacción contra ellas:

*Los opositores protestaban contra la restricción inconstitucional de la libertad académica y educativa y de la libertad de investigación. Se les unieron miles de húngaros indignados por la más reciente campaña de propaganda antieuropea que llamaba a los húngaros a “**detener a Bruselas**”.*

En reacción a las primeras protestas, el gobierno aceleró el procedimiento legislativo con el objetivo de prohibir un auténtico debate político sobre la enmienda. Durante la protesta masiva emergieron otras causas de descontento, tales como el cierre ilícito del periódico de izquierda Népszabadság, las restricciones de la libertad de expresión, la propaganda de Fidesz, aireada incluso en los canales de televisión pública, y la exclusión social y la xenofobia alimentadas por el gobierno.

Cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin -una figura inspiradora clave para otros líderes como el primer ministro Orbán- visitó Budapest en febrero, tuvo lugar una marcha anti-Putin. Por su parte, en el Día Nacional, celebrado en marzo, **miles de personas participaron** en una protesta en la que hicieron sonar silbatos mientras hablaba el primer ministro. Un tribunal había revocado la decisión del gobierno de prohibir esta protesta. Se registraron enfrentamientos con manifestantes partidarios de Orbán.

La HCLU afirmó que se negaría a registrarse bajo la nueva ley, insistiendo en que ya cumplía totalmente con las regulaciones existentes. Y en septiembre, **23 OSC**, incluida la HCLU, presentaron una apelación conjunta ante el Tribunal Constitucional húngaro contra la nueva ley. De ese modo ofrecieron un ejemplo más del modo en que, en diferentes contextos, durante 2017 la sociedad civil trabajó unida para hacer uso de los canales legales para defender derechos.

Las acciones del gobierno lo ponen cada vez más en un rumbo de colisión con los **valores** centrales de la UE: el respeto de los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el estado de derecho. En julio, la UE inició procedimientos legales formales contra el gobierno húngaro por violar con la nueva ley la libertad de asociación, además de otros derechos básicos, y en diciembre **anunció** que llevaría al gobierno ante el Tribunal Europeo de Justicia.

En abril la UE también **inició** un proceso formal en relación con el trato del gobierno hacia la UCE, y en junio **comenzó** procesos legales contra los gobiernos de la República Checa, Hungría y Polonia por negarse a aceptar refugiados según el sistema de cuotas de la UE. En lo que fue una señal más de su disposición a actuar en defensa de sus valores fundamentales, en diciembre la UE también **inició un proceso** contra el gobierno de Polonia por infracciones graves contra el estado de derecho, después de que éste reforzara su control sobre los nombramientos judiciales. Mientras tanto, en mayo el gobierno de **Noruega** declaró que Hungría y Polonia tendrían que permitir que el financiamiento fluyera directamente a la sociedad civil en el marco de un paquete de ayuda que otorga en tanto que miembro del Área Económica Europea, tema de desacuerdo desde que en 2014 el gobierno húngaro **allanara** las oficinas de tres OSC apoyadas por Noruega y acusara a Noruega de interferir políticamente.

En tiempos en que el rol y el propósito de la UE son cada vez más cuestionados en los países miembros más poderosos, la sociedad civil independiente de Hungría y la sociedad civil internacional seguirán presionando para que la UE se mantenga fiel a sus principios y haga cumplir los acuerdos de derechos humanos con los que los estados se comprometieron al asociarse.